

Punta Arenas, dos de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece doña María Fernanda Benavides Henry, defensora penal pública, en representación de doña Karoline Pérez Aguilar, imputada en causa RIT N° 499-2021, RUC: 2100655738-1 del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, quien deduce acción constitucional de amparo en contra de la resolución dictada en audiencia celebrada el 19 de noviembre del año en curso por el Juez Titular de dicho Tribunal, Sr. Jorge Lavín Saint-Pierre, por la que no dio lugar a la suspensión del procedimiento del artículo 458 del Código Procesal Penal y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva, afectando su libertad personal y seguridad individual, solicitando sea acogida, para que en definitiva se restablezca el imperio del derecho, ordenado la suspensión del procedimiento y consecuentemente el cese de la medida cautelar de prisión preventiva, oficiando al Servicio de salud respectivo para la realización del informe psiquiátrico correspondiente.

Explica que la audiencia celebrada el 19 de noviembre de 2021, en la causa singularizada, tenía por objeto discutir la suspensión prevista en el artículo 458 del Código Procesal Penal, ocasión en que hizo valer diversos antecedentes psiquiátricos de la imputada que fundamentan una sospecha de inimputabilidad, entre ellos la ficha clínica que la amparada mantiene en el Hospital Clínico de Magallanes, que da cuenta que desde el año 2012 presente sospechas de brotes de esquizofrenia, relatando escuchar voces que le dicen qué hacer, siendo hospitalizada en la unidad de psiquiatría para evaluación; igualmente un certificado UPFHI en donde se confirma que su diagnóstico es esquizofrenia y policonsumo. Añadió un informe pericial psiquiátrico de fecha 13 de marzo y 13 de abril de 2015, en cuyas conclusiones se consigna que la historia y evolución corresponderían a un cuadro de Esquizofrenia, por las características clínicas y su historial de delitos, sería hebefrénica y correspondería a una enajenación mental. Incorporó un informe pericial psicológico de fecha 8 de abril del 2015, elaborado por el



perito psicólogo Alejandro Valle que concluye que la amparada mantiene una discapacidad intelectual.

Acompañó un informe pericial psiquiátrico del año 2021, elaborado por la médico psiquiatra doña Paulina Pizarro Ramonda, que señala -en lo sustancial- que la amparada tiene antecedentes psiquiátricos desde niña, con sintomatología polimorfa y múltiples diagnósticos, que, mirados en retrospectiva, son compatibles y avalan el diagnóstico actual de Esquizofrenia Hebefrénica. La patología señalada corresponde a una enajenación mental: su voluntad se encuentra interferida patológica y profundamente, por lo que su conducta y sus actos no pueden ser imputables. La entrevistada no es capaz de entender el contexto ni las consecuencias de su actuar, y su condición la exime, en forma permanente, de toda responsabilidad en los hechos que se investigan, la peritada es inimputable. También un Dictamen de invalidez solicitud de pensión AFP trabajador afiliado, correspondiente a la imputada, que señala que mantiene un impedimento y menoscabo de la capacidad de trabajo igual a 72.0 (igual o mayor a 2/3) por lo que se devenga la pensión de invalidez a contar del 19 de febrero de 2020 y un Oficio emitido por Mónica Almonacid Barría, médico psiquiatra del Hospital Penitenciario de Puerto Montt, dirigido al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, que da cuenta de que su diagnóstico es el de esquizofrenia, detallando su tratamiento farmacológico.

Alega que no obstante la contundencia de los antecedentes presentados, el juez recurrido rechazó la petición y mantuvo la prisión preventiva de la imputada, expresando que "Entiendo que si las consecuencias, según lo ha citado la defensa en fallos de la Excma. Corte Suprema son de tanta importancia en el sentido que decretado el 458 la imputada queda libre entiendo que eso nos obliga a exigir un estándar más alto a aquellos antecedentes que el art. 458 exige, vale decir elementos que nos hagan presumir la inimputabilidad de la joven en este caso. Dicho eso, entiendo que aquellos que se han expuesto son básicamente documentos o antecedentes insuficientes que no están dotados de suficiente objetividad e imparcialidad, entendemos que son básicamente



emanados de la defensa y por lo mismo, la pura ficha clínica que sería lo más objetivo no parece por ahora digamos necesaria para el estándar que se exigiría para esta decisión en cuanto suspender el procedimiento y dejar libre a la imputada, entendiendo que carecen de la suficiente plausibilidad los antecedentes expuestos por la defensa para hacer lugar a esta suspensión del 458, desestimamos esta petición."

Estima que el artículo 458 del Código Procesal Penal establece un imperativo legal, y además exige una mera presunción y no otro tipo de justificación procesal, por lo que frente a la sospecha de enajenación mental del imputado o imputada, la ley ordena al juez o jueza la realización ciertas actuaciones orientadas a confirmar o descartarla, de tal manera que si ella es confirmada, corresponde la aplicación de un procedimiento especial que asegura el ejercicio de los derechos y garantías vinculados al debido proceso a quien adolece de ciertas capacidades cognitivas o intelectuales, o padece de enfermedades mentales que le incapacitan para responder penalmente de la imputación penal que se realiza.

La decisión del juez recurrido, perturba la libertad de la amparada puesto que los antecedentes invocados para aplicar el citado artículo 458 son de una contundencia indudable. No obstante, lo anterior, el recurrido se aparta de la norma legal, aumentando el estándar que, bajo lo que para él es una amenaza de que la imputada quede en libertad en el evento de que decida suspender el proceso. En el caso concreto se torna especialmente nocivo, puesto que influye en la libertad de la amparada sujeta a la cautelar más gravosa del ordenamiento la cual no es procedente por ser consecuencia directa y necesaria de la suspensión del proceso que debe aplicarse en este caso.

Discute la calificación de suficiencia de los antecedentes que esgrime el Tribunal cuando se trata de documentos provenientes de instituciones distintas de la defensa, como la ficha clínica, el Dictamen de Invalidez Solicitud de pensión AFP trabajador afiliado y el Oficio emitido por el Hospital Penitenciario de Puerto Montt,



dirigido al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, documentos que derivan de instituciones del Estado que son confirmados a su vez por las pericias solicitadas por la defensa. Incluso los informes periciales realizados con 6 años de diferencia por profesionales distintos, arriba a la misma conclusión diagnóstica.

De lo anterior, concluye, queda clara la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión, de rechazar la suspensión del procedimiento respecto de quien existen antecedentes contundentes para sospechar su inimputabilidad, al transgredir los principios y las normas del ordenamiento jurídico, y en especial los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 9.1, igualmente lo dispuesto en el artículo 19 n°7 letra b) de la Constitución Política de la República, y del Código Procesal Penal contenidas en los arts. 140, 458 y siguientes que indican que no pueden decretarse medidas cautelares, ni menos seguirse un proceso penal en contra de una persona enajenada mental como ocurre en la especie.

En lo que atañe a la arbitrariedad esta se configura en relación a la falta de la debida fundamentación que exige la ley, dado que la resolución se limita a señalar que son antecedentes provenientes de peritajes de la defensa y no de organismos imparciales, lo que no resulta ser efectivo y que además cuestiona el profesionalismo y calidad de los peritos que realizan su trabajo de manera absolutamente imparcial, sin sesgos ni vinculados de manera obligatoria a las pretensiones o teorías del caso de la defensa.

Informa por el Juez recurrido, doña doña Marianela Chacur Benítez, Juez Titular del Juzgado de Competencia Común Puerto Natales, por el feriado legal del recurrido.

Expresa que ante dicho Tribunal se sustancia, en sección garantía, la causa RIT N° 499-2021 RUC N° 2100655738-1, seguida en contra de doña Karoline Monserrat Pérez Aguilar, por el delito de robo con intimidación. En audiencia de 19 de julio de 2021, se controló detención, se formalizó investigación y se dispuso la prisión preventiva de la



TBRBLHRDXF

imputada. Luego, en audiencia celebrada el día 19 de noviembre de 2021, se desestimó la solicitud de la defensa en orden a decretar la suspensión del procedimiento al tenor de lo que dispone el artículo 458 del Código Procesal Penal, por estimar, el juez de la causa, que los antecedentes expuestos resultaban insuficientes para presumir la inimputabilidad por enajenación mental de la imputada. Seguidamente se rechazó también la solicitud de la defensa en orden a modificar la medida cautelar de prisión preventiva que grava a la imputada por considerarse que no existían antecedentes nuevos que modificaran aquellos que se tuvieron en vista al decretarse dicha cautelar.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de amparo es un arbitrio jurisdiccional, a través del cual, quien se encuentra privado de libertad personal, en contra de quien existiere orden de arraigo, detención o prisión emanada de autoridad que no tenga facultad de disponerla, o expedida fuera de los casos previsto por la Ley, o sin que haya mérito o antecedentes que lo justifiquen, sea que dicha orden se haya ejecutado o no, podrá, si no hubiere deducido los otros recursos legales, reclamar su inmediata libertad o que se subsanen los respectivos defectos.

SEGUNDO: Que, la acción constitucional se funda en haberse celebrado audiencia el 19 de noviembre de 2021, en la causa seguida ante el Juzgado de Puerto Natales, contra la amparada, ocasión en que el Juez recurrido rechazó la solicitud planteada por la defensa, en orden a suspender el procedimiento en los términos previstos en el artículo 458 del Código Procesal Penal y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva a su respecto.

TERCERO: Que, el señor Juez recurrido informa que la decisión que se reclama descansa en la ponderación de los antecedentes esgrimidos, los que se consideraron insuficientes al tenor de la normativa aplicable, teniendo en vista en su dictación que, como consecuencia de tal suspensión procesal deriva que la imputada recupere su libertad y el peligro que ello conlleva.



CUARTO: Que, el artículo 458 del Código Procesal Penal prescribe: "Imputado enajenado mental. Cuando en el curso del procedimiento aparecieren antecedentes que permitieren presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado, el ministerio público o juez de garantía, de oficio o a petición de parte, solicitará el informe psiquiátrico correspondiente, explicitando la conducta punible que se investiga en relación a éste. El juez ordenará la suspensión del procedimiento hasta tanto no se remitiere el informe requerido, sin perjuicio de continuarse respecto de los demás coimputados, si los hubiere".

QUINTO: Que, de la norma transcrita se extrae que la decisión del Tribunal debe fundarse en la ponderación de los antecedentes acompañados, determinando si permiten construir la presunción de inimputabilidad que se alega, de modo que la calificación de suficiencia de los antecedentes contenida en la resolución que se reclama por la defensa, se enmarca dentro de las facultades legales conferida al Juez recurrido. Del mismo modo se ha podido constatar que la aludida decisión fue adoptada en audiencia, previo debate y realizando una correcta interpretación del artículo en examen, por lo que no vislumbra un actuar ilegal ni tampoco arbitrario.

SEXTO: Que, corrobora la conclusión expresada, que de los antecedentes acompañados y de las alegaciones formuladas en estrados, surge que la imputada se encuentra formalizada en la causa RIT 499-2021 por el delito de robo con intimidación y sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva desde el mes de julio de 2021 y es respecto de aquel hecho que se debe analizar la eventual inimputabilidad de la amparada, respecto de los cuales los antecedentes esgrimidos no hacen alusión alguna.

Por lo demás, resulta importante constatar la circunstancia no rebatida por la recurrente, en orden a que en causas previas seguidas contra la misma amparada, la defensa ya ha ventilado similares antecedentes a los que fundan la presente solicitud, donde los órganos jurisdiccionales han desestimado la concurrencia de la eximente de responsabilidad por enajenación mental que se



alega, de manera que carecen de la entidad suficiente para construir en este caso, la presunción que la norma exige.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **SE RECHAZA**, el recurso de amparo deducido por la abogada María Fernanda Benavides Henry, en favor de Karoline Pérez Aguilar, en contra de la resolución de 19 de noviembre de 2021 dictada en causa rit 499-2021 del Juez de Letras y Garantía de Puerto Natales don Jorge Lavín Saint Pierre.

Regístrese, comuníquese lo resuelto al Juzgado a quo, a fin que se agregue copia del presente fallo a la carpeta virtual correspondiente y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Fiscal Judicial Sr. Miño.

Rol N° 155-2021 AMPARO.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministro Marcos Jorge Kusanovic A., Ministra Suplente Paola Carolina Oltra S. y Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. Punta arenas, dos de diciembre de dos mil veintiuno.

En Punta arenas, a dos de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

